

LA OPINIÓN DE

ARTURO DÍAZ,
CONSEJERO REGIONAL

El retorno de los gerentes: ¿A quién servirá el nuevo gabinete?

Desde las gélidas costas del Estrecho de Magallanes, donde la presencia del Estado no es una opción técnica sino una condición de supervivencia, observamos con profunda preocupación la configuración del gabinete anunciado esta semana por el presidente electo José Antonio Kast. Lo que se nos presenta no es un equipo de servicio público volcado a las necesidades de las mayorías, sino un directorio corporativo que pretende administrar el país bajo una lógica empresarial, ignorando la complejidad social y geográfica de nuestros territorios.

Esta dinámica, establecida desde el primer día, entrega una interrogante que va más allá de las capacidades técnicas de cada uno de los ministros. La pregunta de fondo es: ¿Realmente servirán a Chile cuando estén en ese cargo o seguirán sirviendo a intereses empresariales? La designación de figuras como Francisco Pérez Mackenna (ex CEO de Quiñenco) en Cancillería, Fernando Barros (director de Oxiquim) en Defensa, o el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (vicepresidente de la CPC), revela una intención clara de trasladar el poder de decisión directamente a las cúpulas del gran capital.

Para Magallanes, esta composición es alarmante. El riesgo de conflictos de interés no es solo una sospecha académica, sino una amenaza real a nuestra soberanía regional. Es plenamente plausible pensar que estos ministros, por el hecho de provenir mayoritariamente del sector privado, mantienen una lealtad hacia los holdings que representaban hasta ayer. Más aún, la “puerta giratoria” se asoma como una sombra ética: es muy probable que, tras su paso por el Estado, regresen a ocupar asientos en los mismos directorios que hoy deben regular. ¿Podrá un ministro fiscalizar con rigor a la industria energética o acuícola si sabe que su próximo empleo depende de la buena voluntad de esas mismas empresas?

Chile ya experimentó la ilusión de que los gerentes podían solucionar los problemas sociales. Como representantes del Frente Amplio en el Consejo Regional, seremos firmes: la política debe ser un muro contra el avance de los intereses particulares sobre el bien común. No permitiremos que las decisiones que afectan a Puerto Williams o Natales se tomen pensando en el futuro laboral corporativo de un ministro en Las Condes. Magallanes no es una sucursal; es una comunidad que exige que sus gobernantes sirvan al pueblo y no a sus antiguos —o futuros— empleadores.